

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, tres (3) de febrero de dos mil veintiuno (2.021)

Auto Interlocutorio No. 59

MAGISTRADO PONENTE: VICTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DIAZ

MEDIO DE CONTRO:	REPARACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE:	76001-33-33-009-2015-00012-01
DEMANDANTE:	SONIA GOMEZ DAZA Y OTROS asesjr@gmail.com
DEMANDADO:	NUEVA EPS Y OTROS Ham.conava@gmail.com Harold.aristizabal@conava.net jcvasquez@clinicaversalles.com.co secretaria.general@nuevaeps.com.co notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co snsnotificacionesjudiciales@supersalud.gov.co luquagmo775@gmail.com Angiej.rojas@nuevaeps.com.co Ingrid.gomez@nuevaeps.com.co njudiciales@mapfre.com.co sanferfe@hotmail.com smobonaga@clinicaversalle.com.co
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – CONFIRMA AUTO QUE DECLARÓ PROBADA FALTA DE LEGITIMACION POR PASIVA Y FALTA DE JURISDICCION

I. OBJETO DE LA DECISION

Se resuelve el recurso de apelación propuesto por la parte demandante contra el auto interlocutorio nro. 753 del 22 de octubre de 2019 dictado por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali en audiencia inicial del 22 de octubre de 2019¹, que declaró probada la excepción de falta de legitimación por pasiva de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y de la Superintendencia Nacional de Salud y, en consecuencia, también declaró probada la excepción de falta de jurisdicción.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del CPACA, actuando a través de apoderado judicial, la señora Sonia Gómez Daza y otros demandaron a los médicos Jesús Enrique Mosquera Angulo, Fernando Horacio Fernández Zambrano, a la Clínica Versalles S.A., a la Nueva EPS, al Ministerio de Salud y de la Protección Social, y a la Superintendencia Nacional de Salud; solicitaron que se les declare administrativamente responsables de la falla del servicio médico por la cirugía denominada “Ureterorrenoscopia Endoscopia con Laser” realizada a la señora Sonia Gómez Daza en la IPS Clínica Versalles el día 6 de noviembre de 2012.

Como restablecimiento del derecho solicitan el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales, morales y daño a la vida de relación ocasionados a los demandantes.

¹ Ver folios 952 a 955

III. LA PROVIDENCIA APELADA.

En el transcurso de la audiencia inicial se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Salud y la Protección Social y de la Superintendencia Nacional de Salud, y, en consecuencia, declaró probada la excepción de falta de jurisdicción.

Para ello indicó que, en el caso objeto de estudio, las pretensiones de la demanda van encaminadas a que se declare la responsabilidad patrimonial de las entidades por las *“secuelas causadas por la cirugía ureterorrenoscopia endoscópica con láser, practicada en la clínica Versailles el día 6 de noviembre de 2012”*. Considerando entonces, que, de conformidad con la controversia planteada, era necesario analizar si los hechos narrados involucraban o no al Ministerio de Salud y la Protección Social y a la Super Intendencia de Salud.

Sobre el tema indicó que de conformidad con los artículos 59 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 2 del Decreto 4107, el Ministerio de Salud y Protección Social tiene a su cargo funciones de formulación, dirección, orientación, regulación, participación, promoción y evaluación de planes programas y proyectos en materia de salud.

Por su parte, manifestó que la Superintendencia de Salud tiene asignadas funciones primordialmente de inspección, control y vigilancia, en los términos del artículo 35 de la Ley 1122 de 2007.

En virtud de tal análisis, concluyó que los hechos que suscitan la controversia no permiten involucrar al Ministerio de Salud y de la Protección Social, ni a la Superintendencia de Salud en virtud de alguna omisión, pues en efecto los hechos dañinos tienen que ver: i) con una mala elección del procedimiento médico y ii) la inapropiada ejecución del acto médico en sí mismo. Entonces, no puede decirse que la presunta mala elección del procedimiento y su indebida ejecución se deba a una omisión del Ministerio de Salud y Protección Social y/o Superintendencia de Salud, porque sus funciones no se extienden al punto de sustituir el criterio del profesional de la medicina para cubrir de manera presencial todos los actos médicos para tratar de evitar que algo pueda salir mal.

Añade, que, en todo caso, la parte demandante no invocó que, de manera previa a la atención médica que ocasionó el daño alegado, hubiera puesto en conocimiento del Ministerio de Salud y Protección Social o de la Superintendencia de Salud irregularidades relacionadas con la prestación de los servicios de salud.

En conclusión, estimó que las entidades demandadas carecen de legitimación en la causa por pasiva y, por ende, debían ser desvinculadas del proceso.

Finalmente, considera que la desvinculación de dichas entidades implica que el extremo pasivo queda conformado por la Nueva EPS, la Clínica Versailles S.A., los médicos Fernando Horacio Fernández Zambrano y Jesús Enrique Mosquera Angulo, lo que trae como consecuencia declarar la falta de jurisdicción para seguir conociendo del presente proceso, pues ninguna de las entidades tiene calidad de entidad pública, incluyendo la Nueva EPS quien si bien es una sociedad de economía mixta su porcentaje de capital público no supera el monto exigido por el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, para que pueda ser considerada como tal.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Inconforme con la decisión anterior, la apoderada judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación manifestando:

Que el Consejo de Estado ha determinado que la legitimación en la causa puede ser de hecho o material, última que tiene que ver con el vínculo o participación que tiene un ente en un proceso, la cual no impide al fallador pronunciarse de fondo frente a las pretensiones de la demanda toda vez que constituye un elemento de la pretensión y no de la acción. Por lo anterior, sostuvo que teniendo en cuenta que lo que se alega en el proceso es que tanto el Ministerio de Salud y de la Protección Social y la Superintendencia de Salud tiene responsabilidad en el asunto aquí demandado, las consideraciones del despacho se deben de tener en cuenta es al momento de fallar y no en esta audiencia ya que la existencia de una legitimación en la causa por pasiva de hecho habilita al Juez Administrativo para el conocimiento del proceso siendo necesario agotar todo el trámite procesal a efectos de tener claridad de la legitimación material en la causa por pasiva de las demandadas (para sustentar sus dichos trajo a colación dos providencias del Consejo de Estado la primera de fecha 19 de septiembre de 20016 (rad. 57444 y la segunda del primero de marzo de 2018 (rad. 43269).

De todo lo anterior concluyó que esta jurisdicción tiene competencia para vincular y juzgar a los particulares o personas de derecho privado en virtud del fuero de atracción, aun cuando al momento de realizar el análisis probatorio del proceso se establezca que la entidad pública, también demandada, no es responsable de los hechos y daños que se le atribuyen en el libelo. Esta misma posición ha sido reiterada por el Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, entre ellas en sentencia con radicado 2016-00269-00 del 3 de febrero de 2019 que apoyo esta misma posición.

Finalmente indicó, que el Ministerio de Salud tiene funciones que le son esenciales e indelegables tales como ejercer la rectoría sectorial convertirse en un ente regulador del comportamiento de todos los actores públicos y privados de la salud y ser el responsable supremo de la ejecución de los programas de la salud pública, además quedó encargado de las competencias normativas de las materias técnicas de salud, el diseño y estímulo de las políticas de salud y la responsabilidad indelegable de garantizar las prestaciones de los servicios de salud pública bien sea de forma directa o direcciones seccionales y locales, teniendo en cuenta que existen protocolos de orden médico que son obligatorios para la práctica de las técnicas médicas que deben de ser utilizados por los doctores adscritos a la EPS. El Ministerio debe entonces regular la ejecución de dichos protocolos y programas para efectos de que se preste eficientemente el servicio público de salud, así mismo debe ejercer control del acto médico de la técnica en el diagnóstico del paciente.

Por su parte la Superintendencia Nacional de Salud ha emergido como instancia central de inspección, vigilancia y control de la calidad de la atención en salud, la cual ejerce sus funciones sobre los entes públicos y privados, territoriales entre otros.

Finalmente, consideró que el hecho de no vigilarse la eficacia y eficiencia de la aplicación de las políticas de salud y calidad, esta misión conlleva a un inadecuado manejo de la prestación del servicio público de salud, pues sobre las EPS se debe ejercer este tipo de actos para evitar como sucedió en el caso bajo estudio una falla del servicio, a pesar de que la señora Sonia Gómez había dado a conocer la orden en la que se indicaba el procedimiento idóneo que debía realizarse, y que fue emitido por un especialista y autoridad en urología. Sin embargo, la EPS no se la admitió procediendo equivocadamente a autorizar la orden médica dada por el medico Fernando Horacio Fernández, desligándose tanto la Nación por medio del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud de su responsabilidad de ser veedores y vigilantes de los protocolos, programas y eventos que se le están prestando a los afiliados al sistema de salud y si son idóneos. Por consiguiente, le asiste legitimación en la causa por pasiva de hecho a los entes demandado porque la legitimación material debe ser examinada en el fondo.²

V. CONSIDERACIONES:

² Ver Cd audiencia inicial folio 956 C-8

5.1. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer si el Ministerio de Salud y la Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud se encuentran legitimados en la causa por pasiva de manera material dentro de la presente demanda de Reparación Directa, para determinar si la jurisdicción contenciosa administrativa es la competente para resolver en asunto.

5.2. MARCO NORMATIVO

De conformidad con lo establecido en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 en la audiencia inicial se resolverán las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva.

La finalidad de las excepciones previas es la de conjurar vicios formales en procura de evitar decisiones inhibitorias o, dada la entidad de las falencias, impedir que continúe el curso del proceso *ab initio*, ya que no sería posible, ante su existencia, llegar a la sentencia por sustracción de materia.³

Lo anterior significa, que efectivamente la decisión de excepciones previas tiene la virtualidad de ser apelable, y al haber sido proferida en esta ocasión por un Juzgado del Circuito, el competente para desatar el recurso de alzada es el Tribunal Administrativo conforme al artículo 153 del CPACA⁴.

5.1. LEGITIMACION EN LA CAUSA

Entrando al fondo del asunto, tenemos que lo que se pretende en esta oportunidad, es determinar si el Ministerio de Justicia y del Derecho está o no legitimado en la causa por pasiva, para ser llamadas a responder por los perjuicios ocasionados a la demandante.

Frente a lo anterior, el Tribunal debe hacer precisión respecto de los conceptos de falta de legitimación en la causa de hecho y material; para lo cual, se trae a colación el pronunciamiento del Consejo de Estado en Sentencia dentro del proceso con Radicación No. 52001-23-31-000-1997-08625-01 del 28 de julio de 2011, con ponencia del Consejero Dr. Mauricio Fajardo Gómez, que señaló:

“Clarificado, entonces, en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que la misma no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado, resulta menester señalar, adicionalmente, que se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda.

Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la falta de legitimación material

³ CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A - Consejero ponente: GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN - Bogotá, D. C., diecinueve (19) de abril de dos mil quince (2015) - Radicación número: Acto25000-23-25-000-2004-00247-01(1886-12) demandante: JOSÉ AGUSTÍN MORA TORRES - Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL -UAEAC-, y COMO LITISCONSORTE NECESARIO AVIANCA S.A.

⁴ “Artículo 153. Competencia de los tribunales administrativos en segunda instancia. Los tribunales administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.” (Negritas fuera de la norma)

en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo. (...)

Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante legitimado en la causa de hecho por activa y demandado legitimado en la causa de hecho por pasiva y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.
(...)” (Subrayado del Tribunal.)

De lo expuesto, puede decirse que, si bien es cierto que la legitimación en la causa es un asunto sustancial, y que estos deben ser objeto de decisión generalmente a resolver el fondo de la controversia en la sentencia, también lo es que la Ley 1437 de 2011 en su artículo 180, con el fin de evitar sentencias inhibitorias, estableció la facultad para que el Juez pueda dar por terminado el proceso en la primera audiencia, si encuentra que no existe legitimación en la causa.

No obstante, se debe precisar, que no en todos los casos la legitimación en la causa debe aparecer demostrada en la audiencia inicial, porque como se dijo esta es un presupuesto de la sentencia de fondo, por lo tanto, esta debe ser declarada en este estadio, solo para cuando es palmaria la falta de legitimación en la primera audiencia.

5.2. CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 320⁵ del C.G.P, aplicable por remisión del artículo 306⁶ del CPACA, se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose solo sobre los reparos.

El apoderado de la parte demandante en síntesis manifestó que este es no es el momento procesal para decretar la excepción de falta de legitimación, pues a su criterio está demostrada la relación en la producción del daño ocasionado a la demandante tanto por el Ministerio de Salud y Protección Social como por la Super Intendencia Nacional.

Ahora bien, a juicio de esta Sala, el alcance de la excepción por falta de legitimación en la causa a que hace referencia el artículo 180 del CPACA., como aquella que corresponde resolver en la audiencia inicial, atina a la legitimación formal y no a la material, en principio, puesto que en aquellos casos en los cuales sea evidente que está configurada la ausencia de legitimación material, nada impide que la misma debe ser declarada como excepción en audiencia inicial, honrando de esta forma los principios de economía y eficacia procesal.

Así las cosas, se tiene que los demandantes pretenden la reparación de los daños causados como consecuencia de la falla del servicio médico por la cirugía denominada “*Ureterorrenoscopia Endoscopia con Laser*” realizada a la señora Sonia Gómez Daza en la IPS Clínica Versalles el día 6 de noviembre de 2012.

Ahora, respecto del Ministerio de Salud y de la Protección Social se tiene que, el artículo 1º del Decreto 4107 de 2011⁷ establece que dicha entidad tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud, salud pública, y promoción

⁵ Artículo 320. Fines de la apelación.

El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

(...)

⁶ Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

⁷ ARTÍCULO 1º. Objetivos. El Ministerio de Salud y Protección Social tendrá como objetivos, dentro del marco de sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud, salud pública, y promoción social en salud. (...)

El Ministerio de Salud y Protección Social dirigirá, orientará, coordinará y evaluará el Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Sistema General de Riesgos Profesionales, en lo de su competencia, adicionalmente formulará, establecerá y definirá los lineamientos relacionados con los sistemas de información de la Protección Social.



RADICACIÓN : 2015-00012-01
Medio de control : SONIA GOMEZ DAZA Y OTROS
Demandante : NUEVA EPS Y OTROS
Demandado : METRO CALI S.A. y UNIMETRO S.A.

6

social en salud. Siendo ello así dicha entidad es la encargada de la política pública en materia de salud a nivel nacional, mas no tiene entre sus funciones la vigilancia de los hospitales territoriales, como tampoco de estas entidades cuando han sido objeto de demanda por una inapropiada aplicación de un procedimiento médico.

Por otra parte, en lo que respecta a la Superintendencia nacional, teniendo en cuenta que en la demanda no se le endilgaron cargos frente al ejercicio de inspección, vigilancia y control que ejerce la Superintendencia Nacional de Salud conforme lo establecen los artículos 2 y 3 del Decreto 2462 de 2013⁸, concordante con el artículo 39 de la Ley 1122 de 2007⁹ y el artículo 121 de la Ley 1438 de 2011¹⁰, no se observa que le asiste legitimación por pasiva de hecho dentro de la presente demanda, teniendo en cuenta que las pretensiones tienen como sustento el daño ocasionado a la demandante una mala elección del procedimiento médico y la inapropiada ejecución del mismo.

Así entonces, conforme lo ha precisado el Consejo de Estado, no es suficiente con que se le endilguen imputaciones generales a entidades, para considerar que las mismas se encuentran legitimadas en la causa, para ello se requiere que las imputaciones que se endilgan guarden una relación fáctica, jurídica y directa con los hechos y las pretensiones de la demanda, y como quiera que en el presente caso las pretensiones tienen como sustento el presunto daño generado a la demandante por las secuelas de la inadecuada intervención médica, es evidente que a pesar de que las entidades hacen parte en el proceso no tiene conexión directa con los hechos que motivaron el litigio y consecuentemente no estarían llamadas a reparar los perjuicios reclamados ante una eventual sentencia estimatoria de las pretensiones, por lo tanto, el Ministerio Salud y de la Protección Social y la Superintendencia de Salud no se encuentran legitimadas en la causa por pasiva, por ausencia de relación procesal.

La providencia recurrida será **CONFIRMADA** en esta instancia, al considerar, como lo dedujo el *a quo*, que en el presente caso se encuentra probada la excepción de Falta de Legitimación en la Causa por Pasiva del Ministerio de Salud y de la Protección Social y la Superintendencia de Salud y como consecuencia de ello la falta de jurisdicción para conocer el presente asunto por carecerse de fueron de atracción¹¹.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Valle Del Cauca, en Sala Jurisdiccional de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO. - CONFIRMAR el auto interlocutorio nro. 753 proferido por el Juzgado Noveno Administrativo Oral de Cali, en el transcurso de la audiencia inicial del 22 de octubre de 2019, por las razones expuestas en este proveído.

⁸ ARTÍCULO 2o. OBJETIVOS. Los objetivos de la Superintendencia Nacional de Salud son los señalados en el artículo 39 de la Ley 1122 de 2007 y en las normas que la modifiquen o adicionen.

ARTÍCULO 3o. ÁMBITO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. Corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, ejercer inspección, vigilancia y control respecto de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud enunciados, entre otros, en los artículos 121 y 130 de la Ley 1438 de 2011 o las demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.

⁹ Artículo 39º.- Objetivos de la Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones de inspección, vigilancia y control, desarrollará, además de los señalados en otras disposiciones, los siguientes objetivos:

a. Fijar las políticas de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

¹⁰ ARTÍCULO 121. SUJETOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Serán sujetos de inspección, vigilancia y control integral de la Superintendencia Nacional de Salud:

121.1 Las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, las Empresas Solidarias, las Asociaciones Mutuales en sus actividades de Salud, las Cajas de Compensación Familiar en sus actividades de salud, las actividades de salud que realizan las aseguradoras, las Entidades que administren planes adicionales de salud, las entidades obligadas a compensar, (...)

121.2 Las Direcciones Territoriales de Salud en el ejercicio de las funciones que las mismas desarrollan en el ámbito del sector salud, (...)

121.3 Los prestadores de servicios de salud públicos, privados o mixtos. (...)

¹¹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Consejera Ponente MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO. Providencia del 25 de julio de 2019. Radicación número:

68001-23-31-000-2007-00128-01(51687). Actor: YURLEY ROJAS FONSECA.

Demandado: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Y OTROS. Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA. Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Falta del servicio médico asistencial/ RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - "(...) El fuero de atracción resulta procedente siempre que, desde la formulación de las pretensiones y su soporte probatorio, pueda inferirse que existe una probabilidad mínimamente seria de que la entidad o entidades públicas demandadas, por cuya implicación en la litis resultaría competente el juez administrativo, sean efectivamente condenadas.(...) Tal circunstancia es la que posibilita al mencionado juez administrativo adquirir y mantener la competencia para fallar el asunto en lo relativo a las pretensiones lanzadas contra aquellos sujetos no sometidos a su jurisdicción, incluso en el evento de resultar absueltas, por ejemplo, las personas de derecho público, igualmente demandadas, cuya vinculación a la litis determina que es la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la llamada a conocer del pleito. (...) la Sección precisó que la circunstancia de que algunos de los sujetos vinculados al proceso sean juzgados generalmente por el juez ordinario, no excluye la competencia de esta jurisdicción por la aplicación del fuero de atracción. Basta que el demandante, con suficientes fundamentos fácticos y jurídicos, impute acciones u omisiones contra varios sujetos y que uno de ellos deba ser juzgado por esta jurisdicción, para que ésta asuma la competencia, sin que resulte relevante que la sentencia finalmente absuelva al ente público. (...) la Sección reiteró que, cuando se formula una demanda, de manera concurrente, contra una entidad estatal y contra un sujeto de derecho privado, por un asunto que en principio debería ser decidido ante la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante esta jurisdicción, que adquiere competencia para definir la responsabilidad de todos los demandados. (...) se concluye que esta jurisdicción tiene competencia para vincular y juzgar a los particulares o personas de derecho privado en virtud del fuero de atracción, aun cuando al momento de realizar el análisis probatorio del proceso se establezca que la entidad pública, también demandada, no es responsable de los hechos y daños que se le atribuyen en el libelo. (...) el factor de conexión que da lugar a la aplicación del fuero de atracción y que permite la vinculación de personas privadas que, en principio, están sometidas al juzgamiento de la jurisdicción ordinaria, debe tener un fundamento serio, es decir, que en la demanda se invoquen acciones u omisiones que, razonablemente, conduzcan a pensar que su responsabilidad pueda quedar comprometida.

RADICACIÓN : 2015-00012-01
Medio de control : SONIA GOMEZ DAZA Y OTROS
Demandante : NUEVA EPS Y OTROS
Demandado : METRO CALI S.A. y UNIMETRO S.A.



7

SEGUNDO: REMITIR el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Cali (reparto), previas las anotaciones en el sistema siglo XXI.

TERCERO: Por Secretaría de este Tribunal, **COMUNICAR** la presente decisión al Juzgado Sexto Administrativo de Cali.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE,



VÍCTOR ADOLEO HERNÁNDEZ DÍAZ
Magistrado



ZORANNY CASTILLO OTALORA
Magistrada



GUILLERMO POVEDA PERDOMO
Magistrado